



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 21 de agosto de 2025

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Cabal Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ acción contencioso administrativa”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisibile (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se desestima la presentación directa. Declárase perdido el depósito de fs. 2. Notifíquese, devuélvanse los autos principales digitales y, oportunamente, archívese la queja.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisibile (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Que *"...cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida..."* (conf. causa "Vidal", Fallos: 344:3156, suscripta por los jueces Rosatti, Maqueda, Highton de Nolasco y Lorenzetti).

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se desestima la presentación directa. Declárase perdido el depósito de 2. Notifíquese, devuélvanse los autos principales digitales y, oportunamente, archívese la queja.



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

### DISIDENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

Considerando:

1º) Que la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca desestimó de oficio la acción contencioso - administrativa planteada por Cabal Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada (en adelante Cabal) a fin de cuestionar la resolución DGR n° 832/17 de la Dirección General de Rentas de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca por la cual rechazó el recurso de revocatoria planteado contra la resolución que había determinado la obligación en concepto de “derechos de publicidad y propaganda” respecto de los períodos 2010 a 2015, por la suma de \$ 409.816.

Para así decidir, el tribunal a quo consideró que no estaba agotada la instancia administrativa, requisito exigido en los arts. 1º, 5º y concordantes del Código Contencioso Administrativo provincial, pues la actora había omitido interponer el recurso jerárquico previsto en el art. 87 del Código Tributario Municipal.

2º) Que Cabal cuestionó la sentencia mediante recurso extraordinario cuya denegatoria dio lugar a la presente queja.

Entre otros argumentos, sostiene que la sentencia incurrió en excesivo rigor formal al aplicar el requisito del agotamiento de la instancia administrativa pues, en el caso, resultaba un ritualismo inútil tramitar algún otro tipo de recurso en dicha órbita. Agregó que la autoridad administrativa era incompetente para resolver un planteo de inconstitucionalidad como el que había formulado respecto del “derecho de publicidad y propaganda” reclamado por el fisco local.

3°) Que si bien las decisiones de índole procesal y de derecho local resultan, en principio, ajenas a la instancia extraordinaria en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Fallos: 305:112; 313:548; 324:2672, entre otros), en el caso cabe hacer excepción a dicha regla pues la sentencia impugnada incurre en un injustificado rigor formal que atenta contra la garantía de defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 315:2690; 323:1084, entre otros).

Por otro lado, cabe destacar que la decisión cuestionada es asimilable a definitiva en tanto clausura toda posibilidad de debate ulterior acerca de la validez del obrar administrativo impugnado por la actora (conf. doctrina de Fallos: 323:1919, entre otros).

4°) Que según surge de los autos principales elevados en forma digital, Cabal impugnó la determinación de los “derechos de publicidad y propaganda”, correspondientes a los períodos 2010 a 2015, realizada mediante la resolución DGR 1115/16, por considerar, entre otras razones, que dicho tributo resultaba inconstitucional. Puntualmente, sostuvo –entre otros argumentos- que el gravamen era lesivo del art. 16 de la Constitución Nacional, que no había habido publicación en el Boletín Oficial de la Nación de las normas relativas al tributo discutido, y que además, en el caso, se violaba la ley 23.548.

La Dirección General de Rentas encuadró esa impugnación como recurso de revocatoria y la rechazó con remisión a los fundamentos del dictamen de la Asesoría Legal (resolución DGR 832/17, fs. 13/14 de los autos principales, en especial tercer párrafo). En dicho dictamen, el órgano asesor trató los argumentos que fundaron el planteo de inconstitucionalidad formulado por Cabal (ver fs. 8/12 de los autos principales). Esto dio lugar a la interposición de



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

una acción judicial a fin de impugnar la Resolución DGR 832/17 en la que Cabal mantuvo el planteo de constitucionalidad del tributo. Tal como quedó expresado en el considerando 1º, la demanda fue declarada inadmisible por el superior tribunal de la causa porque no se había instado la revisión de ese acto administrativo mediante la deducción del recurso jerárquico.

5º) Que, tal como lo ha resuelto esta Corte en el precedente “Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. c/ Provincia de Salta”, el principio de división de poderes supone que, cualesquiera sean las facultades del poder administrador a nivel nacional o provincial para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no le corresponde declarar la inconstitucionalidad de éstas, pues aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo y admitir que el poder pueda residir y concentrarse en una sola sede (ver Fallos: 269:243, considerandos 4º, 6º y 10).

Esta doctrina del Tribunal fue reafirmada en el caso “Bruno, Raúl Osvaldo”, en el que precisó que “es (una) regla constitucional, tan imperativa para las provincias como para la Nación, que la facultad de declarar inconstitucionales las leyes, y de anular actos en su consecuencia, es potestad exclusiva de los tribunales de justicia” (Fallos: 311:460, considerando 13, último párrafo).

6º) Que, sobre tales bases, al menos en lo que se refiere a la cuestión constitucional introducida por Cabal al impugnar la determinación de oficio, la sentencia debió determinar si la exigencia de agotar la instancia para obtener un pronunciamiento sobre el punto de la “autoridad administrativa de

última instancia” como paso previo a la demanda judicial, no constituía un ritualismo inútil que la podría eximir de plantear un recurso jerárquico, por innecesario o inconducente.

El hecho de que ese principio, invocado por la recurrente, no tenga consagración legal expresa no sería un óbice para su procedencia. Desde antiguo la jurisprudencia de la Corte reconoció que en algunos casos resultaba innecesaria y redundante, es decir una exigencia ritualista, la formulación de un reclamo administrativo previo a la demanda judicial (“Acción Católica Argentina”, Fallos: 184:59; “Mariño, Edward Arturo”, Fallos: 252:326; “Castaño, Benito Vitoriano”, Fallos: 276:46; entre muchos otros). Y, en tal sentido, ha dicho que cabe prescindir de ese recaudo en supuestos justificados, como, por ejemplo, cuando se advierte la ineficacia cierta de este procedimiento por cuanto son inadmisibles las conclusiones que conducen a un injustificado rigor formal y que importan asimismo un ilógico dispendio administrativo y jurisdiccional (Fallos: 324:3335, “The First National Bank of Boston”).

7°) Que, en tales términos, toda vez que lo resuelto impide a la actora obtener la revisión judicial del acto que considera lesivo de sus intereses e implica una indebida restricción a su derecho a acceder a la justicia, cabe concluir en que media una relación directa e inmediata entre lo resuelto y las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas (artículo 15 de la ley 48), razón por la cual corresponde descalificar el pronunciamiento impugnado con arreglo a la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias.

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja interpuesta, se declara procedente el recurso extraordinario planteado y se revoca la sentencia apelada. Con costas en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida. Reintégrese el depósito de fs. 2.



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Agréguese copia de la presente a esta queja en papel, y envíesela al tribunal de origen a fin de que sea adjuntada a los autos principales –que fueron elevados digitalmente-, los que se devuelven y, por quien corresponda, se dicte nueva sentencia con arreglo a lo expresado en este pronunciamiento. Notifíquese y, oportunamente, cúmplase.

Recurso de queja interpuesto por: **Cabal Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada**,  
representada por el **Dr. Carlos César Massolo**.

Tribunal de origen: **Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca**.